

Informe de la Delegación Investigativa del Gremio Nacional de Abogados sobre las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico en Honduras

14 de septiembre de 2014



**National Lawyers Guild
132 Nassau Street, Room 922
New York, NY 10038
Tel: 212-679-5100
Fax: 212-679-2811
www.nlg.com**

Introducción

El Gremio Nacional de Abogados (NLG, por sus siglas en inglés) ha prestado especial atención a Honduras desde el golpe de Estado en junio de 2009 que depuso al presidente democráticamente electo, Manuel Zelaya. En aquel momento, defensores de los derechos humanos y otros hondureños solicitaron a NLG investigar temas de preocupación relacionados con el Estado de derecho, la abrogación de los derechos humanos, ataques al poder judicial, y las circunstancias que dieron lugar al golpe. Como consecuencia, la Asociación Americana de Juristas (AAJ), la Asociación Internacional de Abogados Democráticos (IADL, por sus siglas en inglés), y la Asociación Internacional contra la Tortura (AICT), enviaron a Honduras una delegación conjunta, cuyo informe preliminar en inglés está disponible [aquí](#). El informe final en español está [aquí](#).

Desde el golpe, Honduras se ha convertido en la capital mundial de homicidios, con una represión generalizada contra abogados, jueces, organizaciones de derechos humanos y pueblos indígenas, que han solicitado a NLG su apoyo y solidaridad. Las condiciones socioeconómicas han empeorado, y el gobierno ha recortado los gastos en programas sociales. La pobreza extrema ha subido un 26,3 por ciento, casi dos terceras partes de la población hondureña viven debajo de la línea de pobreza, y la desigualdad se ha vuelto más marcada. El Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) relató que en los primeros dos años después del golpe, el 10 por ciento más rico de la población hondureña disfrutó más que el 100 por ciento de todo aumento de ingresos reales. No obstante esas condiciones, los Estados Unidos han persistido en proveer apoyo militar y otro apoyo económico al gobierno hondureño. A inicios del 2013, nuestros aliados y colegas hondureños nos pidieron que presenciáramos las elecciones y documentáramos nuestros hallazgos. Organizamos una delegación de observadores electorales acreditados para servir como “acompañantes internacionales” bajo la ley electoral hondureña. Nuestra delegación concluyó que existieron serios problemas que socavaron de manera significativa cualquier aseveración que la elección fuese “libre y justo” o “transparente.” El informe final de nuestro monitoreo electoral en noviembre de 2013 está disponible en inglés [aquí](#), y en español [aquí](#).

Como resultado de las disputadas elecciones, Juan Orlando Hernández asumió la presidencia. Desde entonces, Hernández y la legislatura hondureña han promulgado una cantidad de leyes que estipulan la concentración de los poderes ejecutivo y legislativo a costa de derechos y libertades individuales. Han implementado también políticas que privatizan recursos y funciones estatales. A inicios de 2014, nuestros colegas nos pidieron investigar las controversiales leyes y reformas constitucionales que facilitaron el establecimiento de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), también conocidas como ‘Ciudades Modelo.’ Las ZEDEs representan una marcada expansión de las zonas de libre comercio, ya que facilitan la creación de ciudades estado privatizadas diseñadas para existir de forma independiente de los sistemas legales, administrativos y sociales del Estado hondureño. Son enclaves favorables a los inversionistas y gobernados por sus propias leyes, tribunales y sistemas de impuestos. Propuestas para fomentar el

crecimiento económico y los empleos, las ZEDEs proveen la base legal para la adquisición corporativa de territorios dentro de Honduras, en muchos casos sin consulta previa con los ciudadanos y las comunidades que actualmente ocupan esas tierras. Dada la polémica naturaleza de la titulación de tierras en Honduras y la abrogación histórica de los reclamos de tierra hechos por sus ciudadanos, muchos comentaristas temen que las ZEDEs mermen más a fondo los derechos de grupos marginalizados en Honduras y que intensifiquen la represión contra quienes resistan la desposesión. Al ceder a inversionistas nacionales y extranjeros el control de funciones fundamentales del Estado, el arreglo permite a las empresas eludir leyes y prácticas empresariales locales.

Fundada en el 1937 como una asociación de abogados y juristas progresistas, el Gremio Nacional de Abogados (NLG) promueve los derechos humanos antes que los derechos de propiedad, y ha estado involucrado en asuntos internacionales desde su comienzo. NLG fue una de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) elegidas por el gobierno estadounidense para representar al pueblo estadounidense en la fundación de las Naciones Unidas en el 1945. Miembros de NLG ayudaron a redactar el borrador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en 1948 fundaron la Asociación Internacional de Abogados Democráticos (IADL, por sus siglas en inglés), una de las primeras ONGs acreditadas por la ONU.

Como organización basada en los Estados Unidos, NLG investiga los papeles históricos y actuales que juegan el gobierno y las empresas estadounidenses en todo el mundo. Documentamos esos papeles, los criticamos cuando corresponde, y nos aliamos con individuos y movimientos sociales luchando contra la influencia de los Estados Unidos en sus países. En América Latina, nuestra crítica de las políticas y los abusos del gobierno estadounidense condujo a delegaciones en los 1980s a El Salvador para apoyar a activistas de derechos humanos y a Nicaragua para apoyar al gobierno Sandinista, bajo el ataque de los Contras en aquel tiempo. Cientos de miles de refugiados estaban huyendo hacia los Estados Unidos como resultado de esos eventos, y abogados de NLG estaban estrechamente comprometidos en representar a los refugiados y en defender el movimiento para otorgarles santuario. En años más recientes, hemos enviado delegaciones a Cuba, Haití, Venezuela, Bolivia, El Salvador y Colombia para apoyar movimientos sociales progresistas y para criticar las erróneas políticas estadounidenses. Algunas de nuestras delegaciones se han centrado específicamente en las violaciones de los derechos humanos, algunas han estudiado movimientos sociales, y otras han observado procesos electorales.

Una delegación del Comité Internacional de NLG viajó a Honduras en junio de 2014 para investigar la implementación de las ZEDEs en Honduras. El presente informe es el último en una serie de informes elaborados por delegaciones de NLG a Latinoamérica y otros lugares. El informe documenta nuestros hallazgos sobre las implicaciones que tienen las ZEDEs en cuanto a los derechos humanos, dentro del contexto de la actual crisis de derechos humanos en Honduras. La versión original en inglés del presente informe está disponible [aquí](#).

Índice

I. LA EVOLUCIÓN DE LAS ZEDES	5
a. La Zona Económica Especial	5
b. El Predecesor de las ZEDES: Ciudades Modelos y REDs	6
c. El Surgimiento de las ZEDES.....	8
d. Una Comparación de las Estructuras Legales de las REDs y las ZEDES	10
1. Las ZEDES se pueden imponer a comunidades reticentes.....	10
2. Las ZEDES no estipulan ninguna transición a la gobernación democrática	11
3. Las ZEDES carecen de transparencia.....	12
II. PUNTOS DE VISTA HONDUREÑOS SOBRE LAS ZEDES.....	14
a. Falta de Información y Secretismo Gubernamental	14
b. Falta de Titulación de Tierras	16
c. Falta de Procesos Democráticos en las ZEDES.....	17
d. Las ZEDES son Congruentes con Otras Políticas Neoliberales de Desarrollo	18
e. La Conquista del Poder Judicial por el Congreso	19
III. VIOLACIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL BAJO LA ESTRUCTURA DE LAS ZEDES	21
a. Derechos de Auto-Determinación y Participación Democrática	21
b. Derechos de propiedad.....	23
c. Derechos de los Pueblos Indígenas a la Consulta Previa y las Tierras Tradicionales.....	24
d. Obligaciones de Empresas y Derechos Humanos.....	26
IV. CONCLUSIÓN.....	27
V. PARTICIPANTES DE LA DELEGACIÓN.....	28

I. LA EVOLUCIÓN DE LAS ZEDES

a. La Zona Económica Especial

Las Zonas Económicas Especiales (ZEEs) modernas surgieron durante la segunda mitad del siglo XX. Las ZEEs dependen generalmente de regulaciones empresariales y comerciales que son independientes de las del país en que están ubicadas, con el objetivo de fomentar el comercio. Se pueden centrar en una variedad de iniciativas económicas, incluyendo puertos, la producción, la exportación, la extracción de recursos naturales, y el turismo.¹ La ZEE principal de las últimas dos décadas es la Zona de Procesamiento de Exportaciones (ZPE), la cual se dedica sobre todo a la fabricación y desarrollo orientados a la exportación. La creación de esas zonas está fundamentada en la premisa que los países en vías de desarrollo atraerían empresas orientadas a la exportación y la producción a través de concesiones legales, económicas, políticas y administrativas a las empresas.² Esas áreas pueden ser limitadas concretamente a un pedazo de propiedad concreta, a una colección de propiedades de una empresa con un acuerdo estilo ZPE con el gobierno local, o a tierra propiedad del gobierno local. Algunas ZPE de más amplia gama son Shenzhen y Hainan en China y las ZEEs en Dubái. Históricamente, las ZEEs hondureñas no han extendido mucho más allá del modelo “cercado” de las ZPEs.

Honduras inició su experimentación con las ZPEs en el 1976 al crear una zona libre en Puerto Cortés.³ La primera zona fue creada bajo la autoridad del gobierno, y privatizada posteriormente en el 1987. Después del huracán Mitch en el 1998, el gobierno hondureño declaró que toda Honduras era una Zona de Libre Comercio (ZLC). En las ZLCs o ZPEs, las cuales se pueden ubicar en cualquier parte del país, las empresas son exentas de los aranceles de importación sobre bienes y equipos de capital, recargos, impuestos selectivos al consumo, e impuestos sobre la venta. La producción y venta de bienes dentro de la ZLC están exentas de los impuestos municipales y nacionales. Es más, las empresas no pagan el impuesto hondureño sobre la renta por 20 años y no están obligadas a pagar impuestos municipales por 10 años. Finalmente, no hay restricción ni en el uso de divisas extranjeras ni en la repatriación de ganancias.⁴ En el 2006, entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), el cual continuó la tendencia de abrir la economía hondureña a más productos extranjeros. Bajo CAFTA, Honduras empezó a dejar entrar sin aranceles un 80 por ciento de productos estadounidenses. Dentro de 10

¹ Matthew Amegual y William Milberg, *Economic Development and Working Conditions in Export Processing Zones: A Survey of Trends*, 1-2, International Labour Office, 2008.

² La mentalidad económica de los países que se dedican al fuerte uso de ZPEs prioriza las actividades de procesamiento de exportaciones como manera de escapar la subversión económica de larga duración del hemisferio sur.

³ Jamie K. McCallum, *Export Processing Zones: Comparative data from China, Honduras, Nicaragua, and South Africa*, International Labour Office, 8 (2011), http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_158364.pdf.

⁴ Id. en 1, Free Trade Zone, Green Valley Industrial Park, (14 de julio del 2014), disponible aquí: http://www.greenvalleyindustrialpark.com/free_trade_zone.html.

años, se eliminarán casi todos los aranceles.⁵ Como parte del tratado, se permitirá la entrada a los Estados Unidos sin aranceles de un 98 por ciento de productos hondureños.⁶

b. El Predecesor de las ZEDEs: Ciudades Modelo y REDs

Paul Romer, un economista bien reconocido, promovió la idea de las ciudades modelo como una innovadora estrategia de desarrollo económico en su presentación TED en el 2009.⁷ Según Romer, la ciudad modelo comprende tres elementos: 1) un acta constitutiva que expone las normas de la ciudad; 2) una área abundante de tierra deshabitada; y 3) convenios con otras naciones, incluyendo una entidad designada para controlar la administración de la ciudad.⁸ Las ideas de Romer fueron recibidas con un período de cobertura positiva por los medios de comunicación,⁹ y Romer alentó a Honduras utilizar las ciudades modelo para promover el crecimiento económico. El gobierno hondureño pos-golpe se mostró receptivo a la sugerencia y aprobó la Ley de Regiones Especiales de Desarrollo (REDs) en el 2011.

Las REDs se iban a administrar por un consejo de supervisión con un control casi total sobre la creación, el manejo, y las políticas de zonas políticas autónomas dentro del país. Las REDs iban a ser financiadas y manejadas por inversionistas haciendo uso de capital extranjera para fomentar la inversión, crear oportunidades de desarrollo, construir la infraestructura necesaria, y agilizar el engorroso proceso de hacer negocios en Honduras. Pero en diciembre del 2012, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró inconstitucional la Ley RED, una decisión que motivó al entonces Presidente de la República Porfirio Lobo Sosa a calificar a los magistrados de la Sala Constitucional como traidores.¹⁰

La base principal del exitoso recurso de inconstitucionalidad,¹¹ en la cual la Corte

⁵ Daniel Griswold y Daniel Ikenson. *The Case for CAFTA: Consolidating Central America's Freedom Revolution*, CATO Institute Center For Trade Policy Studies, 4-5 (2004), <http://www.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/tbp-021.pdf>; What Is CAFTA?, The CAFTA Intelligence Center, (14 julio 2014), http://www.caftaintelligencecenter.com/subpages/What_is_CAFTA.asp.

⁶ Griswold y Ikenson, 1. Véase también: *CAFTA-DR, Final Text*, Office of the United States Trade Representative, Executive Office of the President of the United States, (14 de julio de 2014), en: <http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/cafta-dr-dominican-republic-central-america-fta/final-text>.

⁷ Paul Romer, *Why the world needs charter cities*, TED, julio 2009, http://www.ted.com/talks/paul_romer.

⁸ Id.

⁹ Véase, por ejemplo, "Hong Kong in Honduras," *The Economist*, 10 de diciembre de 2011, <http://www.economist.com/node/21541392>; Adam Davidson, *Who Wants to Buy Honduras?*, New York Times Magazine Online, 8 de mayo de 2012.

¹⁰ Rosemary Joyce y Russell Sheptak, *Constitutional Death Spiral in Honduras*, Upside Down World (21 de enero de 2013), <http://upsidedownworld.org/main/honduras-archives-46/4085-constitutional-death-spiral-in-honduras>.

¹¹ Caso No. 769-11, Corte Suprema de Justicia; Oscar Humberto Cruz, et al, *Interposicion de Inconstitucionalidad de Decretos Legislativos No. 283-2010 Ratificado con el Decreto No. 4-2011*, 18/10/2011.

fundamentó su fallo,¹² era que la Ley RED modificó aspectos irreformables¹³ de la Constitución al 1) crear zonas que violaban el concepto de soberanía hondureña al negar acceso a ciertas tierras soberanas a los hondureños, violando así el Artículo 107 de la Constitución; 2) remover el control de Honduras sobre ciertas tierras, violando así los Artículos 13 y 19 de la Constitución; 3) negar la gobernanza del pueblo hondureño en esas zonas, violando así el Artículo 2 de la Constitución; y 4) crear poderes paralelos legislativo, ejecutivo y judicial derivando poder de los promotores e inversionistas en lugar del gobierno hondureño.

A menos de dos meses del fallo sobre la Ley RED, el Congreso Nacional de Honduras votó para destituir a los cuatro magistrados de la Sala Constitucional que habían dictado sentencia contra la ley.¹⁴ Los mismos cuatro magistrados también se habían enemistado con el gobierno con su fallo sobre una ley de reforma policial. Muchos comentaristas legales, incluyendo la Ministra de Justicia y Derechos Humanos de Honduras y el Relator Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, caracterizaron esa destitución como un segundo golpe, ya que no cumplió con los procedimientos que precisa la Constitución.¹⁵ No obstante, la Corte Suprema ratificó la destitución de los cuatro magistrados en un fallo posterior.¹⁶ Con el Congreso en manos del Partido Nacional, el Presidente Lobo eligió los sustitutos de los cuatro magistrados destituidos según su fidelidad a reformas del mercado libre y otras reformas.¹⁷

Mientras tanto, no obstante el acuerdo del gobierno hondureño para crear una Comisión de Transparencia que incluía como miembro a Romer, el gobierno firmó un memorándum de entendimiento con un grupo de inversionistas sin consulta previa con la Comisión. Romer protestó, y el gobierno alegó que a causa de un tecnicismo legal nunca se formó de manera oficial la Comisión.¹⁸ Como consecuencia, Romer se retiró de la iniciativa de ciudades modelo en Honduras. El plan actual para las ZEDES se diferencia

¹² *Inconstitucional decreto de "ciudades modelo"*, El Herald, 17 octubre 2012. Consultado por última vez el 9 de agosto del 2014 en:

<http://www.elheraldo.hn/csp/mediapool/sites/ElHeraldo/Pais/story.csp?cid=573030&sid=299&fid=214>.

¹³ Constitución de la República de Honduras 1982, Art. 373, William S. Hein & Co., Inc., Buffalo, New York, 2012 (HeinOnline World Constitutions Illustrated Library 2012).

¹⁴ Arthur Phillips, *Charter cities in Honduras?* Open Democracy, 7 enero 2014, <https://www.opendemocracy.net/opensecurity/arthur-phillips/charter-cities-in-honduras>.

¹⁵ *Se conculcó principio de independencia*, EL HERALDO (18 diciembre, 2012), <http://www.elheraldo.hn/alfrente/565690-209/se-conculco-principio-de-independencia> (consultado por última vez el 7 de agosto de 2014).

¹⁶ *CSJ dijo no al reintegro de cuatro magistrados*, EL HERALDO (19 febrero 2013), <http://www.elheraldo.hn/csp/mediapool/sites/ElHeraldo/Pais/story.csp?cid=574915&sid=299&fid=214> (consultado por última vez el 7 de agosto de 2014).

¹⁷ Sandra Cuffe, *Congress' Last Stand: Privatization among New Laws in Honduras*, Upside Down World, 28 de enero de 2014. Consultado por última vez el 8 de agosto de 2014 en: <http://upside-downworld.org/main/honduras-archives-46/4668-congress-last-stand-privatizations-among-new-laws-in-honduras>.

¹⁸ Elizabeth Malkin, *Plan for Charter City to Fight Honduras Poverty Loses Its Initiator*, The New York Times, 30 de septiembre de 2012.

marcadamente de la visión de Romer, y excluye varias salvaguardias que consideraba fundamentales para su operación.

c. El Surgimiento de las ZEDEs

El 5 de septiembre del 2013, el Congreso Nacional de Honduras aprobó el Decreto No. 120-2013, el cual creó una innovadora estructura legal para Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs). La Ley ZEDE representa una tentativa por ciudadanos y extranjeros que apoyan la liberalización del comercio y de derechos laborales de introducir un modelo amplio y particularmente agresivo de las ZEEs, incluso más flexible que las que existen en Shenzhen o Singapur. Las ZEDEs acogen la liberalización del comercio más allá de simples incentivos de impuestos e infraestructura. Permiten que los mismos individuos, entidades comerciales y organizaciones que financiarían y participarían en las zonas estructuren su organización social por sí mismo. Ese proceso incluye el contenido de las leyes, el sistema de impuestos, las fuerzas de seguridad, los sistemas de educación, trabajo y salud, y otros elementos normalmente manejados por el estado.¹⁹

El Artículo 1 en el Capítulo 1 de la Ley ZEDE declara que son aplicables los Artículos 10, 11, 12, 13, 15 y 19 de la Constitución de la República. Esas disposiciones definen los límites territoriales de Honduras, obligan a Honduras a respetar los tratados internacionales, y prohíben la ratificación de tratados que dañen la integridad territorial o soberanía de Honduras. Lo demás contenido de la Constitución, un documento de 379 artículos, sólo tendría el efecto que se lo dé un acuerdo entre el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), la junta independiente de administración de las ZEDEs, y los promotores empresariales que buscan desarrollar la tierra.

Muchos derechos fundamentales de los ciudadanos hondureños que vivieren dentro de las fronteras de las ZEDEs no son protegidos bajo la nueva Ley ZEDE. Esos derechos incluyen: los derechos al Habeas Corpus y Amparo, Artículos 182 y 183; la inviolabilidad del derecho a la vida, 65; garantías de la dignidad humana y la integridad física, 68; la garantía contra el trabajo forzoso, 70; la libertad de expresión, 72; protecciones para la libertad de prensa, 73; la libertad de religión, 77; las libertades de reunión y asociación, 78, 79, y 80; la libertad de circulación, 81; los derechos de defensa, de libre acceso a los tribunales, y de asistencia legal y representación para la defensa de los pobres, 82 y 83; y el derecho a no ser detenido salvo de manera legal, 84 y 85.

Anunciado apenas en febrero del 2014, el CAMP de 21 miembros incluye nueve ciudadanos estadounidenses, tres europeos, y únicamente cuatro hondureños. El CAMP está dominada por activistas neoliberales y libertarios, varios con lazos estrechos con el expresidente estadounidense Ronald Reagan. Quedan numerosas dudas sobre esa entidad. No queda claro, por ejemplo, si los miembros del CAMP perciben un salario u otra

¹⁹ Decreto Legislativo No. 120-2013, La Gaceta, 6 septiembre de 2013, de aquí en adelante la Ley ZEDE.

compensación por sus labores. No hay una clara prohibición con respecto a la inversión por los miembros del CAMP en las mismas ZEDES, o su involucramiento en relaciones personales o comerciales con los inversionistas, elevando preocupaciones sobre conflictos de intereses. Los amplios poderes desenfrenados del CAMP también son una causa de preocupación. Entre otras funciones, el CAMP es responsable de nombrar (y destituir) al Secretario Técnico (el director ejecutivo de la ZEDE), quien ejerce poder ejecutivo y legislativo en las zonas. El CAMP está a cargo también de la planificación y el desarrollo de las ZEDES, de la aprobación de todos los reglamentos internos de las ZEDES, e incluso de cubrir los puestos vacantes de la misma comisión.²⁰ Dada la falta de supervisión por parte de cualquier poder del gobierno hondureño, los poderes desenfrenados otorgados a las ZEDES crean un obstáculo significativo para cualquier impugnación en el futuro.

Otra disposición problemática de la Ley ZEDE se trata de la adjudicación de disputas legales. Los tribunales autónomos de las ZEDES tienen la discreción de adoptar sistemas legales de fuera de Honduras.²¹ Bajo el marco legal de las ZEDES, trabajarían juristas contratados según las recomendaciones del Consejo de la Judicatura de Honduras.²²

Otro aspecto particularmente inquietante de la Ley ZEDE está vinculado con las disposiciones que permiten la ubicación de ZEDES en áreas de “baja densidad poblacional,” y en municipios en los departamentos colindantes con el Golfo de Fonseca y el mar Caribe, sin consulta previa con las comunidades afectadas.²³ El sitio web gubernamental²⁴ identifica 14 áreas como áreas potenciales para ZEDES: Punta Castilla y Sico Paulaya, Colón; Puerto Cortés, Bajamar y Cuyamel, Cortés; La Ceiba, Atlántida; Quimistán, Santa Bárbara; Ocotepeque, Ocotepeque; Gracias, Lempira; Palmerola, Comayagua; Santa María del Real, Olancho; Santos Guardiola, Bay Islands; varios municipios en el Golfo de Fonseca; y El Triunfo y Choluteca, Choluteca. No queda claro si se haya recibido o aceptado ya propuestas para la creación de ZEDES en esas zonas.²⁵ El sitio web también contiene información relacionada con los recursos naturales y humanos de muchas de las zonas potenciales. Muchas comunidades creen que son blancos para esas zonas. La comunidad histórica Garífuna de Río Negro en Trujillo fue derribada en el 2009 para la inversión, y las ZEDES han aumentado los temores que podrían acontecer incidentes similares en el futuro.²⁶ La opacidad de la manera en que se

²⁰Ley ZEDE, Capítulo III.

²¹Ley ZEDE, Capítulo I.

²²Ley ZEDE, Capítulo III.

²³Id.

²⁴ Consultado por última vez el 4 de septiembre de 2014 en: <http://zede.gob.hn/>.

²⁵ Honduras, *Mapa Zonas Potenciales*. Consultado por última vez el 4 de septiembre de 2014 en: http://zede.gob.hn/?page_id=108.

²⁶ OFRANEH, Honduras: Ministerio Público respalda “legalidad” de la Ley ZEDE, 28 de abril de 2014. Consultado por última vez el 5 de septiembre de 2014 en:

<http://ofraneh.wordpress.com/2014/04/28/honduras-ministerio-publico-respalda-legalidad-de-la-la-ley-zede-ciudades-modelo/>;

OFRANEH, A Communication from OFRANEH: Vallecito, the New Invasion and The Alleged “Heir”, Resistencia Honduras, 15 de julio de 2013. Consultado por última vez el 5 de

están promoviendo las ZEDES no ayuda a aplacar los temores. El Presidente Juan Orlando Hernández recién anunció sus planes para crear un “parque industrial minero” en El Corpus, Choluteca.²⁷ Aunque no existe una declaración oficial que esa área se esté considerando para una ZEDE, el lenguaje sugiere una zona especial de desarrollo, posiblemente poniendo en riesgo la residencia y subsistencia de los vecinos.

Esas disposiciones, discutidas en mayor detalle a continuación, representan una desviación significativa de la propuesta original de Romer para ciudades modelo, y violan el derecho internacional.

d. Una Comparación de las Estructuras Legales de las REDs y ZEDES

Las ZEDES ya no se promocionan como la encarnación de las ciudades modelo de Romer. Más bien, Mark Klugmann, quien fungió como redactor de discursos para los presidentes estadounidenses Ronald Reagan y George H.W. Bush, describe a las ZEDES como zonas “LEAP” que proporcionan marcadas protecciones legales, económicas, administrativas y políticas para empresas. Sin considerar la nomenclatura, hay por lo menos tres áreas en las cuales el modelo ZEDE es mayor motivo de preocupación que las ciudades modelo de Romer. En primer lugar, las ZEDES no presentan a los hondureños con una verdadera posibilidad de elección porque se pueden imponer a comunidades reticentes sin ningún referéndum. En segundo lugar, el régimen legal de las ZEDES no estipula ninguna transición a la gobernación democrática. En tercer lugar, el régimen legal de las ZEDES está basado en una falta de transparencia sin precedente.

1. Las ZEDES se pueden imponer a comunidades reticentes

La visión de Romer de ubicar a las ciudades modelo únicamente en áreas deshabitadas está ausente en la Ley ZEDE.²⁸ Romer ha declarado que “en una ciudad modelo, la legitimidad deriva de las decisiones de los habitantes de tomar parte en las nuevas normas...”²⁹ Para lograr esa legitimidad, Romer propuso encontrar unos mil kilómetros cuadrados de “tierra deshabitada” en la cual se ubicaría la ciudad modelo.³⁰ Según Romer, la gente “puede venir a vivir bajo el nuevo marco constitutivo, pero a nadie se le

septiembre de 2014 en: <http://bit.ly/1sHNk1O>.

²⁷ *Gobierno Creará Parque Industrial Minero*, El Heraldó, 9 de agosto de 2014. Consultado por última vez en: <http://www.elheraldo.hn/alfrente/727401-209/gobierno-crear%C3%A1-parque-industrial-minerohern>.

²⁸ Decreto Legislativo No. 236-2012. Art. 1 (reformas al Art. 329 de la Constitución), de aquí en adelante Reforma Constitucional.

²⁹ Brandon Fuller & Paul Romer, *Success and the City: How Charter Cities Could Transform the Developing World*, The Macdonald-Laurier Institute, abril de 2012, <http://www.macdonaldlaurier.ca/files/pdf/How-charter-cities-could-transform-the-developing-world-April-2012.pdf>.

³⁰ Paul Romer, “Why the world needs charter cities,” TED, julio 2009, http://www.ted.com/talks/paul_romer.

obliga vivir bajo ese marco.”³¹

El marco legal de las ZEDEs, al contrario, contempla expresamente el establecimiento de zonas en áreas habitadas. La ley precisa que la designación de ZEDE requiere la aprobación de dos terceras partes del Congreso, y que está sujeta a un referéndum local de los habitantes actuales del área, salvo en ciertas áreas designadas. Si el Instituto Nacional de Estadística de Honduras declara que el área tiene una densidad poblacional por debajo del promedio para un área rural, el Congreso podría imponer una ZEDE a comunidades existentes en esa área sin la protección básica de un referéndum.³² Esto otorga al Instituto Nacional de Estadística la capacidad de elegir cuándo se quitaría a ciudadanos hondureños su derecho a la auto-determinación a través del gobierno democrático. Es más, incluso un referéndum no hace nada para proteger la decisión de quienes votan en contra de una ZEDE impuesta en sus comunidades, por no hablar de quienes sean convencidos a votar a favor de una ZEDE como consecuencia de una campaña de desinformación. Además de las áreas de baja densidad poblacional, las áreas colindantes con el mar Caribe y el Golfo de Fonseca son excluidas del proceso de referéndum.³³ Esto incluye las islas de Zacate Grande y Amapala, lugares actualmente sujetos de estudios de factibilidad para ZEDEs, y donde viven comunidades de larga duración.

El marco legal de las ZEDEs posibilita que tierras de propiedad poco clara sean tomadas por la fuerza por el estado, el cual tendría todas las tierras en las ZEDEs rurales, y contempla la expropiación de tierras de dueños que no quisieran vender sus tierras.³⁴ En pocas palabras, las ZEDEs se pueden imponer en áreas habitadas, socavando uno de los principios básicos de las ciudades modelo de Romer: que todos quienes viven y trabajan allí habrían elegido hacerlo.

2. Las ZEDEs no estipulan ninguna transición a la gobernación democrática

La Ley RED original exigió el eventual retorno a la gobernación democrática.³⁵ Pareció que Romer justificó el período sin democracia al propugnar un concepto de “votar con los pies,” en el cual todos los habitantes de la ciudad modelo hubieran elegido vivir allí, y así hubieran elegido sacrificar cualquier democracia fuera de la ciudad a favor del desarrollo económico dentro de ella. La Ley ZEDE va más allá de la Ley RED, ya que a menos que se aboliera totalmente la ZEDE, no estipula ningún retorno a la gobernación democrática. En su lugar, la ZEDE se gobernaría de manera permanente por el CAMP, sobre el cual los habitantes no tienen ningún poder de elección. En pocas palabras, un comité no electo

³¹ Id.

³² Ley ZEDE, Capítulo III.

³³ Id., Art. 39.

³⁴ Id., Art. 25-28.

³⁵ Decreto Número 123-2011, Arts. 32-39 y 81.

gobernará las vidas diarias de los hondureños viviendo dentro de las ZEDEs, y los habitantes no tendrán ningún control democrático sobre la gobernación local.

3. Las ZEDEs carecen de transparencia

Una gran diferencia entre las ciudades modelo de Romer y el marco legal de las ZEDEs es que ese último deja de lado la Comisión de Transparencia. Romer y otros manifestaron que tal Comisión hubiera existido bajo la Ley RED y estaban tan seguros de su existencia que nombraron los miembros.³⁶ Poco después de que Romer se retiró del proyecto RED, Octavio Sánchez Barrientos y Mark Klugmann, miembros actuales del CAMP de las ZEDEs, argumentaron que la Comisión de Transparencia nunca existió de manera oficial porque el decreto nombrando a Romer y a cuatro miembros más a la Comisión nunca fue publicado en La Gaceta.³⁷

La estructura de gobernación de las RED se fundamentaba en parte significativa en la Comisión de Transparencia. La revista *The Economist* describió esa ente como “quizás la característica más importante” del proyecto de ciudades modelo en Honduras.³⁸ El régimen de las ZEDEs sustituye esa Comisión por el CAMP.

Además, la reducción en transparencia coincide con un aumento en apoyo político al nivel nacional para las ciudades modelo en Honduras. Esto puede ser porque la falta de transparencia ha permitido a los promotores de las ciudades modelo cambiar su mensaje con relación a las ZEDEs dependiendo del público. Acuerdos relacionados con las ZEDEs no son de información pública (un acuerdo con el gobierno surcoreano para emprender un estudio de factibilidad se filtró, y no fue presentado a la población como cuestión de derecho), así que el gobierno puede presentar a los hondureños un mensaje centrado en la generación de empleos. Al mismo tiempo, el gobierno puede presentar a inversionistas extranjeros potenciales un mensaje centrado más en la estabilidad de las ZEDEs y la dificultad relativa de cambiarlas o eliminarlas una vez que se establezcan.

Aunque Romer no mantiene ninguna afiliación formal con la iniciativa de las ZEDEs, su participación previa con el proyecto de las ciudades modelo atrajo publicidad y prestó cierto grado de legitimidad a la iniciativa que el gobierno hondureño necesitaba para atraer a los inversionistas internacionales. De hecho, ahora Klugmann parece sugerir que la participación de Romer fue simplemente una elección estratégica por parte del régimen

³⁶ Tyler Cowen, *Paul Romer on what happened in Honduras*, *Marginal Revolution*, 24 de septiembre de 2012, <http://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2012/09/paul-romer-on-what-happened-in-honduras.html>.

³⁷ Id. Véase también: Elisabeth Malkin, *Plan for Charter City to Fight Honduran Poverty Loses Its Initiator*, *The New York Times*, 30 de septiembre de 2010.

³⁸ “Hong Kong in Honduras,” *The Economist*, 10 de diciembre de 2011, <http://www.economist.com/node/21541392>

hondureño.³⁹

Después de su aprobación, un grupo de más de 50 ONGs presentó recursos de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley ZEDE y las reformas constitucionales relacionadas a las ZEDES.⁴⁰ La Abogada Adelina Ávila Sarmiento presentó el caso en representación de los demandantes a inicios del 2014, presentando 16 argumentos para la inconstitucionalidad. Ávila Sarmiento aseveró que las ZEDES impactarían la soberanía e integridad territorial de Honduras, la forma de gobierno de la nación, y el interés público. También sostuvo que únicamente el Congreso Nacional de Honduras tiene la autoridad para establecer impuestos y crear un sistema monetario.⁴¹ El recurso fue admitido por la Sala Constitucional, por los mismos magistrados que fueron instalados como resultado del golpe judicial en enero 2013 realizado por el Congreso, controlado por el Partido Nacional. Así que no resultó sorprendente cuando la Sala Constitucional rechazó por unanimidad la impugnación. Guillermo Peña Panting, director ejecutivo de Eleútera, un instituto hondureño de políticas liberales, notó, “Con esta decisión, los inversionistas, los constructores nacionales, y extranjeros interesados...ahora tienen el respaldo legal necesario para avanzar la implementación del proyecto.”⁴²

Muchas de las comunidades con las cuales nos reunimos manifestaron sus graves preocupaciones sobre cómo las ZEDES impactarían su derecho a la votación y a la participación en la gobernación local. Miembros de las comunidades nos informaron que varios alcaldes locales habían viajado a Corea del Sur con todos los gastos pagados para aprender sobre las ZEDES. Miembros de esas comunidades no han sido informados sobre las importantes realidades que presentan las ZEDES. Por ejemplo, nos preguntaron si todavía podrían elegir sus alcaldes dentro de una ZEDE, y si fuera así, qué poderes tendrían sus alcaldes. Las respuestas a estas preguntas no quedan claras, aunque parece ser poco probable que la figura de alcalde municipal, o más bien de cualquier autoridad local elegido, existiría bajo una ZEDE. Es más probable que las funciones del gobierno sean desempeñadas por administradores nombrados por las empresas que controlen la ZEDE y los intereses comerciales representados en el CAMP, quitando a los ciudadanos en esas comunidades su derecho a la gobernación democrática. Lo que sí queda bien claro es que no se le ha dado ni a la sociedad hondureña en general ni a las comunidades que se verían afectadas por una eventual ZEDE la información sobre cómo y dónde funcionarían las ZEDES, y cómo se afectarían sus derechos civiles y políticos.

³⁹ Mark Klugmann, *LEAP Zones: Faster Growth with Less Conflict*, Cayman Financial Review, 12 de Julio de 2013, <http://www.compasscayman.com/cfr/2013/07/12/LEAP-Zones--Faster-growth-with-less-conflict/>.

⁴⁰ Adrienne Peralta, *Honduran Supreme Court Rejects Claims of ZEDE Unconstitutionality*, PanAm Post, 21 de junio de 2014, <http://panampost.com/adriana-peralta/2014/06/21/honduran-supreme-court-rejects-claims-of-zede-unconstitutionality/>.

⁴¹ Id.

⁴² Id.

II. PUNTOS DE VISTA HONDUREÑOS SOBRE LAS ZEDES

Para mejor entender los efectos probables de las ZEDES, la delegación se reunió con grupos de base comunitarios, organizaciones de derechos humanos, expertos económicos, y expertos legales que han estudiado la Ley ZEDE y que, en algunos casos, han interpuesto recursos de inconstitucionalidad. La delegación visitó también a comunidades en la región del Golfo de Fonseca porque la Ley ZEDE estipula específicamente que los departamentos en esa zona podrían formar parte del régimen ZEDE.⁴³ Es probable que esas comunidades existentes sean las primeras en encontrarse dentro de un territorio ZEDE y bajo la jurisdicción de un gobierno ZEDE. A lo largo de nuestras reuniones, expertos y miembros de comunidades manifestaron preocupaciones similares sobre la falta de transparencia del proyecto ZEDE, los impactos no definidos de las ZEDES en los derechos políticos y a la tierra de comunidades existentes, y el hostigamiento y la violencia contra activistas, sindicalistas, campesinos, abogados y periodistas que pongan en tela de juicio la implementación de esas políticas gubernamentales. En la sección a continuación, se discuten los puntos de vista de los entrevistados sobre esas y otras cuestiones planteadas a menudo en el transcurso de la delegación.

a. Falta de Información y Secretismo Gubernamental

Prácticamente todas las personas con las cuales habló la delegación en la región del Golfo de Fonseca expresaron preocupaciones sobre la falta de voluntad del gobierno de aclarar los efectos que tendrían las ZEDES en las comunidades existentes dentro de sus fronteras. Vecinos de Zacate Grande, una comunidad que probablemente se ubicaría dentro de una ZEDE, manifestaron a la delegación que sabían de la Ley ZEDE pero que el gobierno no había divulgado prácticamente nada de información sobre cómo funcionaría el régimen o cómo afectaría sus derechos de propiedad y formas de gobierno.⁴⁴ Miembros de la comunidad operan la radio comunitaria “La Voz de Zacate Grande” para informar sobre temas que afectan a la comunidad pero que son ignorados o poco cubiertos por otros medios de comunicación.⁴⁵

De igual manera, no obstante la posibilidad de que las ZEDES nulifiquen contratos y leyes laborales existentes en su territorio, a los miembros del sindicato de trabajadores del puerto que opera en el Golfo Fonseca no se les ha dicho nada. Temen que la llegada de una ZEDE y el puerto propuesto en Amapala implicarían el fin de sus empleos.⁴⁶ Una monja que vive en la región y que está activa en los asuntos comunitarios explicó que

⁴³ Ley ZEDE, Art. 39.

⁴⁴ Entrevista con trabajadores de emisora La Voz de Zacate Grande, en Zacate Grande, Honduras, el 24 de junio de 2014. (“Entrevista La Voz de Zacate Grande”).

⁴⁵ Entrevista La Voz de Zacate Grande; Para más información sobre las actividades de La Voz de Zacate Grande, véase su sitio web: <http://zacategrande.blogspot.com>.

⁴⁶ Entrevista con el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria, SITRAENP, en San Lorenzo, Honduras, el 25 de junio de 2014 (“Entrevista SITRAENP”).

tanto ella como otras monjas están intentando de divulgar información sobre las ZEDEs a los habitantes de comunidades afectadas porque pocos conocen el alcance de los cambios que traerán. Mientras algunos miembros de las comunidades han expresado su esperanza con relación a las ZEDEs porque están ansiosos por trabajar, hay poco conocimiento que la población viviendo dentro de una ZEDE perderá su representación democrática, o que proyectos de desarrollo y aumentos del valor de las tierras podrían imposibilitar que se queden en sus comunidades.⁴⁷

Durante la única reunión pública sobre las ZEDEs de la cual los habitantes de Zacate Grande se dieron cuenta, un funcionario del gobierno dijo a los presentes que el gobierno estaba planificando construir una gran ciudad en la región con hospitales y universidades “como los en Massachusetts.”⁴⁸ Las monjas relataron que alguien de la comunidad preguntó qué pasaría con el valor de las tierras con el desarrollo anunciado, y el funcionario respondió que los pobladores podrían o pagar impuestos de propiedad reflejando el aumento o vender sus tierras.⁴⁹ Cuando un joven de la comunidad manifestó después de la presentación que la gente que vive actualmente en la comunidad de Amapala debería tener el derecho de desarrollar Amapala, el funcionario le dijo con desdén que tenía una mentalidad de troglodita.⁵⁰

Expertos hondureños en la Ley ZEDE que hablaron con la delegación compartieron las preocupaciones de las comunidades. La delegación se reunió con Fernando García Rodríguez, el autor de un informe detallado sobre las ZEDEs publicado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, una organización que viene trabajando en la promoción de la democracia y el desarrollo sostenible en Honduras desde el 1982.⁵¹ Explicó García que el gobierno promueve las ZEDEs de manera ostentosa y las compara deshonestamente a Hong Kong y Singapur, pero obvia aclarar cómo operarían sus gobiernos.⁵²

El juez Mario Díaz, vicepresidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, una organización hondureña de jueces y magistrados dedicados a promover la independencia judicial y el estado de derecho, dijo a la delegación que el secretismo de las ZEDEs forma parte de una amplia problemática de falta de transparencia bajo la legislación hondureña.⁵³ Explicó que la Ley de Secretos Oficiales aprobada este año otorga a las entidades gubernamentales amplios poderes de clasificación, y convierte en un crimen tanto la revelación por un denunciante interno de actos ilegales en el trabajo como la

⁴⁷ Entrevista con las Hermanas de Santa Rosario de Ampala y miembros de La Voz de Zacate Grande, Amapala, Honduras, el 24 de junio de 2014 (“Entrevista Ampala”).

⁴⁸ Entrevista Amapala.

⁴⁹ Id.

⁵⁰ Id.

⁵¹ Entrevista con Fernando García Rodríguez, Tegucigalpa, Honduras, el 26 de junio de 2014 (“Entrevista García Rodríguez Interview”); <http://fesamericacentral.org/honduras.html>.

⁵² Entrevista García Rodríguez.

⁵³ Entrevista con Mario Díaz, Asociación de Jueces por la Democracia, Tegucigalpa, Honduras, el 25 de junio de 2014 (“Entrevista Juez Díaz”).

publicación de información obtenida de un denunciante interno.⁵⁴ Con esta ley en vigencia, es extremadamente difícil obtener información adicional sobre las ZEDEs o de hecho sobre cualquier programa o acción gubernamental que los en poder no quieran discutir.⁵⁵

Esa combinación de la falta de transparencia, la tergiversación de la verdadera naturaleza de las ZEDEs, y la Ley de Secretos Oficiales sirve para tapar prácticamente toda información pertinente sobre las ZEDEs, protegiéndola de los grupos comunitarios y otros interesados en sus impactos sobre la sociedad hondureña.

b. Falta de Titulación de Tierras

Los miembros de la comunidad de Zacate Grande que se reunieron con la delegación de NLG supusieron que la gran mayoría de los habitantes de Zacate Grande no tiene un título legal para las tierras donde viven y donde siembran sus cultivos.⁵⁶ No obstante la presencia continua de la comunidad en sus tierras, han fracasado sus intentos de conseguir un título del gobierno.⁵⁷ Además, incluso antes de las reformas constitucionales y la aprobación de la Ley ZEDE, las comunidades en Zacate Grande que habían residido en sus tierras durante décadas se estaban defendiendo contra grandes terratenientes que reclamaban la propiedad de los terrenos donde viven y trabajan los habitantes comunitarios.⁵⁸

Comunicadores sociales trabajando en la radio La Voz de Zacate Grande investigaron y cubrieron esos temas en gran detalle, resultado en un atentado y herida de bala, amenazas de muerte, y medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a muchos de ellos.⁵⁹ El principal terrateniente involucrado en la disputa es el influyente agroempresario Miguel Facussé Barjum, según consta el terrateniente más grande del país, cuyas fuerzas de seguridad privadas han sido vinculadas con violaciones de derechos humanos en la región del Bajo Aguán en Honduras.⁶⁰ Es más, Facussé asegura que las mismas instalaciones de la emisora La Voz de Zacate Grande están ubicadas en su propiedad privada.⁶¹

⁵⁴ Entrevista Juez Díaz.

⁵⁵ Id.

⁵⁶ Entrevista Zacate Grande.

⁵⁷ Id.

⁵⁸ Id.

⁵⁹ Entrevista Zacate Grande; PM 115/11, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights, Chapter 3, ¶ 54, disponible en línea en <http://www.oas.org/en/iachr/docs/annual/2011/toc.asp> (consultado por última vez el 7 de agosto de 2014).

⁶⁰ Dana Frank, *Wikileaks Honduras: US Linked to Brutal Businessman*, The Nation (21 de octubre de 2011), disponible en <http://www.thenation.com/article/164120/wikileaks-honduras-us-linked-brutal-businessman#> (consultado por última vez el 7 de agosto de 2014).

⁶¹ Entrevista Zacate Grande.

Los miembros de la comunidad de Zacate Grande creen que el aumento en los valores de las tierras que traerá una ZEDE sería una maldición, no una bendición.⁶² Aunque los que tienen títulos podrían obtener buenas ganancias al vender sus tierras, los habitantes dijeron a la delegación que quieren mantener su comunidad y no destruirla con la venta de sus tierras.⁶³ Los esfuerzos de los miembros de la comunidad para obtener títulos y ejercer con seguridad sus derechos políticos a la libre expresión se han impedido, incluso antes de la afluencia de población, industria e inversión que pretende llevar a la región el proyecto ZEDE.⁶⁴ Ya que la gran mayoría de los pobladores de Zacate Grande carecen de un título de tierra, aunque quisieran venderla con ganancia, es mucho más probable que sean desalojados de sus tierras por parte de poderosos intereses con la capacidad y los contactos para asegurar un título de tierra.⁶⁵

En una entrevista aparte, el Juez Díaz explicó que la problemática de la falta de títulos en pequeñas comunidades es generalizada en Honduras, y que programas del Instituto Nacional Agrario diseñados para distribuir tierras a las comunidades organizadas han fracasado en su objetivo de beneficiar a los campesinos porque el proceso es muy lento y con muchos rodeos. Sólo podemos concluir que los problemas de titulación de tierras que enfrenta la comunidad de Zacate Grande son representativos y no exclusivos.⁶⁶

c. Falta de Procesos Democráticos en las ZEDES

Los activistas y expertos consultados por la delegación de NLG estaban universalmente alarmados por la falta de procesos democráticos permitidos por la Ley ZEDE. García está a favor de desarrollar Honduras, pero cree que sería desastroso hacerlo bajo la estructura de gobierno del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) y los Secretarios Técnicos.⁶⁷ Le dejó particularmente afligido la naturaleza antidemocrática del puesto del Secretario Técnico, con sus poderes conjuntos ejecutivo y legislativo.⁶⁸ También notó que, ya que el CAMP también nombrará a los jueces, no hay ninguna separación significativa de los poderes gubernamentales tradicionales dentro de la estructura de las ZEDES. Dado que incluso fuera de la estructura de las ZEDES el gobierno se ha dedicado desde el golpe a esfuerzos para menoscabar poco a poco los derechos y protecciones que pueden ejercer los ciudadanos, García está enormemente preocupado por la merma veloz de los derechos ciudadanos que traerían las ZEDES.⁶⁹

Además, a García le preocupa la ambigüedad del lenguaje usado en la ley. Destaca, por

⁶² Id.

⁶³ Id.

⁶⁴ Id.

⁶⁵ Id.

⁶⁶ Id.

⁶⁷ Entrevista García Rodríguez.

⁶⁸ Id.

⁶⁹ Id.

ejemplo, que además de especificar que las ZEDEs se pueden crear con el objetivo de “cortes comerciales internacionales,” “ciudades autónomas,” “zonas sujetas a un sistema jurídico especial,” “zonas mineras sociales,” y una cantidad de otras zonas especiales enumeradas, también pueden utilizarse para crear “cualquier otro régimen especial no señalado en el presente Artículo o que incluya una combinación de varios de estos regímenes para procurar el desarrollo de las inversiones bajo modelos incluyentes y otros análogos.”⁷⁰ Este lenguaje otorga a la legislatura poderes de gran envergadura para crear dentro de las fronteras del país casi cualquier entidad cuasi soberana imaginable y abre la posibilidad que Honduras estaría compuesta de docenas de diferentes tipos de entidades, todas operando fuera del alcance de toda ley hondureña salvo unas provisiones estrechas.⁷¹

Carlos Padilla del Centro Hondureño de Promoción al Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) expresó temores similares, añadiendo que tanto él como sus colegas están alarmados por la falta de democracia bajo la Ley ZEDE, y que el CAMP está compuesta de miembros del Partido Nacional, grandes inversionistas, y exconsejeros del Presidente estadounidense Ronald Reagan.⁷² CEHPRODEC ha impugnado en varias ocasiones la Ley ZEDE, pero han fracasado sus impugnaciones en los tribunales.⁷³ Padilla cree que es probable que las ZEDEs generen más conflicto y no menos, mientras las comunidades pierdan sus estructuras municipales, el concepto de la soberanía se altere, y el pueblo ya no tenga voz política.⁷⁴ Los representantes del CEHPRODEC enfatizaron que no quieren vivir en una ciudad modelo, sino en un país modelo, en el sentido de que quieren vivir en un país del cual podrían estar orgullosos.⁷⁵

d. Las ZEDEs son Congruentes con Otras Políticas Neoliberales de Desarrollo

Pedro Landa, también de CEHPRODEC, indicó que la Ley ZEDE se sitúa de lleno dentro del marco neoliberal, en el cual la inversión extranjera, junto con la desregulación, impuestos rebajados, y protecciones ambientales reducidas, se promociona como un medio para atenuar la pobreza en Centroamérica.⁷⁶ La Ley ZEDE permite al gobierno entregar tierras a la empresa privada que no hubiera podido entregar bajo la legislación existente minera e hidroeléctrica por sí sola.⁷⁷

Los representantes de CEHPRODEC creen que la lógica de las ciudades modelo se

⁷⁰ Entrevista García Rodríguez; Ley ZEDE, Art. 2.

⁷¹ Entrevista García Rodríguez.

⁷² Entrevista con Carlos Padilla y Pedro Landa, Centro Hondureño de Promoción al Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), en Tegucigalpa, Honduras, el 25 de junio de 2014 (“Entrevista CEHPRODEC”).

⁷³ Entrevista CEHPRODEC.

⁷⁴ Id.

⁷⁵ Id.

⁷⁶ Id.

⁷⁷ Id.

asemeja a la lógica de los enclaves bananeros del siglo pasado: la capacidad de las ciudades modelo de tener sus propias leyes y acuerdos económicos con otros países las convertirán en paraísos fiscales y legales para inversionistas extranjeras a costa de las comunidades locales.⁷⁸ Es más, los excesos de los inversionistas se defenderán con violencia legítima porque estarían operando bajo sus propias leyes y con sus propias fuerzas de seguridad.⁷⁹ CEHPRODEC encuentra peligro en el hecho que las ciudades modelo podrían devaluar la mano de obra de punta a cabo de Honduras porque tendrán sus propios códigos laborales y los trabajadores en las zonas carecerán de garantías democráticas.⁸⁰

García comparte muchas de esas mismas preocupaciones sobre el proyecto ZEDE.⁸¹ Aunque es partidario de algunas formas de alianzas público-privadas en Honduras, viene estudiando el proyecto de ciudades modelo en Honduras desde el 2011 y también ha concluido que la Ley ZEDE es una continuación de la liquidación de nuestros recursos que ha tenido lugar durante los últimos 300 años.⁸² Argumenta que aún no se ha demostrado la veracidad de los beneficios a los pobres de un país que plantea el marco de la teoría económica de rebalse utilizado por las ZEDEs.⁸³ García reconoce que los corredores de infraestructura creados por las ZEDEs podrían generar actividad comercial y crecimiento, pero no se ha demostrado que ese crecimiento conduciría a un desarrollo que beneficie la población en general.⁸⁴

e. La Conquista del Poder Judicial por el Congreso

Tanto García como los representantes de CEHPRODEC señalaron que las últimas impugnaciones de la Ley ZEDE recién habían fracasado, pero que esto no fue ninguna sorpresa dado el control directo ejercido por el poder legislativo sobre el poder judicial.⁸⁵ Ya que la misma legislatura nombró a los sustitutos de los cuatro magistrados que habían fallado en contra de la Ley RED,⁸⁶ CEHPRODEC y otros siguiendo la temática creían que era ineludible que la Corte Suprema de Justicia ratificara la constitucionalidad del segundo intento del Congreso de aprobar una ley creando las ciudades modelo.⁸⁷ Landa afirmó también que bajo la dirección del Fiscal General, quien era el voto único a favor de la Ley RED en su puesto previo de magistrado de la Sala Constitucional de la Corte

⁷⁸ Id.

⁷⁹ Id.

⁸⁰ Id.

⁸¹ Entrevista García Rodríguez.

⁸² Id.

⁸³ Id.

⁸⁴ Id.

⁸⁵ Entrevista García Rodríguez; Entrevista CEHPRODEC.

⁸⁶ Rosemary Joyce y Russell Sheptak, Constitutional Death Spiral in Honduras, Upside Down World, 21 de enero de 2013, en: <http://upsidedownworld.org/main/honduras-archives-46/4085-constitutional-death-spiral-in-honduras> (consultado por última vez el 7 de agosto de 2014).

⁸⁷ Entrevista CEHPRODEC.

Suprema, el estado ha asegurado que no se investigarían de forma significativa denuncias contra empresas e inversionistas extranjeros.⁸⁸ Describió como ejemplo el asesinato el 3 de mayo del 2014 de Rigoberto López, dirigente de un grupo que se opone a la minería en Santa Bárbara. López fue asesinado en una zona de extracción minera y el fiscal ni visitó el lugar para recuperar su cadáver.⁸⁹

Con respecto a la independencia judicial, el Juez Díaz informó a la delegación de NLG que un juez había sido asesinado unos días antes de nuestra reunión, y que han sido asesinados varios jueces en años recientes.⁹⁰ Añadió que en ese ambiente queda claro que la amenaza de asesinato afecta las decisiones de los jueces.⁹¹ Además del temor de la muerte, los jueces que se oponen al actual régimen enfrentan un proceso de separaciones arbitrarias.⁹² El Juez Díaz explicó que después de que la Asociación de Jueces por la Democracia denunció el golpe del 2009, miembros de la organización han sufrido discriminación en sus trayectorias profesionales, han recibido amenazas, y peor por su postura.⁹³ A raíz del despido de los cuatro magistrados de la Sala Constitucional, muchos jueces ahora temen que se les separe de sus cargos o peor si no siguen la voluntad del Congreso y del Presidente.⁹⁴

El sentimiento dominante de los grupos que hablaron con la delegación de NLG era de desconfianza en el gobierno actual, de escepticismo profundo sobre afirmaciones que una ZEDE beneficiaría a ellos u otros miembros de sus comunidades, y de temor sobre lo que ocasionará el establecimiento de ZEDEs. Estos puntos de vista no sorprenden casi nada, dada la violencia dirigida y la hostilidad gubernamental hacia miembros de la comunidad en Zacate Grande y otros lugares que se oponen a las políticas del gobierno actual.

Los vecinos comunitarios enfrentan el espectro de un desalojo de sus tierras sin ningún recurso jurídico y sin alternativas razonables para el futuro. Los sindicalistas enfrentan la posibilidad de vivir en una jurisdicción en la cual no aplican los derechos laborales del estado de Honduras, y donde las leyes creadas por el administrador de la ZEDE suplantando sin consulta o contribución los contratos que protegen sus empleos. El territorio propuesto para la ZEDE en el Golfo de Fonseca no está deshabitado. Decenas de miles de habitantes han vivido y trabajado allí durante generaciones, y son quienes tienen menos probabilidades de beneficiarse de una ZEDE si el proyecto se realice.

⁸⁸ Id.

⁸⁹ Entrevista CEHPRODEC; *Brutal, Public Murder of Anti-mining, Community and Environmental Defender in Honduras*, RIGHTS ACTION (13 de mayo de 2014), <http://www.rightsaction.org/action-content/brutal-public-murder-anti-mining-community-and-environmental-defender-honduras> (consultado por última vez el 7 de agosto de 2014).

⁹⁰ Entrevista Juez Díaz.

⁹¹ Id.

⁹² Id.

⁹³ Id.

⁹⁴ Id.

III. VIOLACIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL BAJO LA ESTRUCTURA DE LAS ZEDE

La Ley ZEDE y las reformas constitucionales violan varios convenios vinculantes del derecho internacional. Incluso antes de que prosperen las ZEDEs, es evidente que las normas provistas para su gobernación y formación violarán los derechos humanos a la auto-determinación y a la participación democrática, protegidos por varios instrumentos jurídicos del derecho internacional. Además, la historia y el actual clima político de Honduras indican enérgicamente que una vez que se establecen las ZEDEs, pondrán en riesgo el derecho humano de utilizar y gozar la propiedad privada, y también los derechos de los pueblos indígenas con respecto a: 1) la consulta previa relacionada con acciones que les podrían afectar, y 2) la tenencia de sus tierras tradicionales. Otra preocupación de la delegación es que las empresas que elijan participar en las ZEDEs se convertirían en cómplices en esas violaciones del derecho internacional.

a. Derechos de Auto-Determinación y Participación Democrática

La Convención Americana sobre Derechos Humanos identifica expresamente como derechos humanos los derechos políticos, declarando que:

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
 - a. de participar en la dirección de los asuntos políticos, directamente o por medio de representantes elegidos;
 - b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
 - c. de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.⁹⁵

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCR), en el cual Honduras es un Estado Parte, contiene lenguaje prácticamente idéntico.⁹⁶ Además, tanto el PIDCR como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) estipulan que: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.”⁹⁷

⁹⁵ Convención Americana sobre Derechos Humanos American Convention on Human Rights, 1144 U.N.T.S. 123, 9 I.L.M. 673 (entró en vigencia el 18 de julio de 1978).

⁹⁶ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 de diciembre de 1966, 999 U.N.T.S. 171 (entró en vigencia el 23 de marzo de 1976), Art. 25 (PIDCR).

⁹⁷ PIDCR, Art. 1 Sección 1; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 16 de diciembre de 1966, 993 U.N.T.S. 3 (entró en vigencia el 3 de enero de 1976), Art. 1 Sección. 1 (PIDESC).

Pero aunque Honduras es Estado Parte en esos tres convenios y por ende está obligado por sus estipulaciones, la Ley ZEDE aprobada por el Congreso Nacional de Honduras está a punto de quitar a cientos de miles de hondureños su derecho de auto-determinación, y el derecho correspondiente de participar en el gobierno.

Así como fue descrita ya en la sección sobre el surgimiento de las ZEDEs, la ley estipula que cada ZEDE será gobernada por un Secretario Técnico único, nombrado por y responsable ante el CAMP compuesto de 21 miembros no electos. Aunque especifica la Ley ZEDE que el Secretario Técnico será propuesto por los residentes de la ZEDE cuando está ubicada en un área de alta densidad poblacional, la ley hace caso omiso en cuanto a qué impacto legal, si lo hubiera, esa propuesta tendría en la elección final del Secretario Técnico por el CAMP.⁹⁸ La ley no menciona nada sobre cuáles medios tendrían que emplear los habitantes para seleccionar un candidato. Tampoco contiene ninguna garantía democrática, e incluso ningún detalle en absoluto, en cuanto al proceso de nombramiento y sustitución del Secretario Técnico de una ZEDE.⁹⁹ Además, el CAMP ni tiene que mantener la pretensión de considerar una propuesta de los habitantes de una ZEDE para el Secretario Técnico en áreas consideradas de baja densidad poblacional.¹⁰⁰ En esas áreas, sólo se les permite proponer un Secretario Técnico a los “promotores u organizadores” de la misma ZEDE.¹⁰¹

Con el visto bueno del CAMP no electo, el Secretario Técnico ejerce tremendos poderes ejecutivo y legislativo dentro de la ZEDE. Son deberes del Secretario Técnico representar la ZEDE, gestionar el gobierno de la ZEDE, promulgar leyes en la ZEDE, implementar las medidas políticas adoptadas por el CAMP, y “lo demás que le atribuya la presente Ley o le delegue el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas.”¹⁰² A las ZEDEs también se las confiere el poder de cobrar impuestos a los dueños de propiedad privada dentro de su jurisdicción según el precio de mercado de los bienes inmobiliarios,¹⁰³ y tienen que establecer sus propios organismos de seguridad interna, incluyendo la policía, la inteligencia, el procesamiento penal, y el sistema penitenciario.¹⁰⁴ Bajo la ley, los organismos de seguridad de una ZEDE operan con competencia exclusiva dentro del territorio.¹⁰⁵

De cualquier punto de vista, la legislación, la tributación, el orden público, el procesamiento penal, y la toma de decisiones por el ejecutivo son asuntos públicos

⁹⁸ Ley ZEDE, Art. 11. Sección 3(a).

⁹⁹ Ley ZEDE, Art. 11, Art. 12.

¹⁰⁰ Las áreas de baja densidad poblacional son las en que el número de habitantes permanentes por kilómetro cuadrado es menos que el promedio para áreas rurales, según los cálculos del Instituto Nacional de Estadística. Reforma Constitucional sobre ZEDEs, Decreto Legislativo No. 236-2012, La Gaceta, 24 de enero de 2013 (Reforma Constitucional) Art. 1 (reformas al Art. 329).

¹⁰¹ Reforma Constitucional, Art. 1.

¹⁰² Ley ZEDE, Art. 12.

¹⁰³ Ley ZEDE, Art. 24.

¹⁰⁴ Ley ZEDE, Art. 22.

¹⁰⁵ Id.

esenciales, pero los habitantes de las ZEDEs no tendrán ninguna oportunidad de participar en esos asuntos ni directamente ni a través de representantes electos. De hecho, no tendrán ninguna oportunidad de elegir representantes en lo más mínimo. Esto representa una violación de las obligaciones de Honduras según la Convención Americana de Derechos Humanos, el PIDCR, y el PIDESC. No hay necesidad de esperar hasta que se realicen las ZEDEs para concluir que su estructura gubernamental viola el derecho internacional. La comunidad internacional debe condenar esa decisión deliberada del gobierno hondureño de privar del derecho al voto a un gran número de sus ciudadanos y de quitarles la mayoría de las protecciones legales que se les estipula el derecho hondureño.

Además, el método que se plantea para la misma creación de las ZEDEs viola esas mismas obligaciones en virtud de los tratados internacionales. Aunque la reforma constitucional que permite la creación de ZEDEs exige un plebiscito antes de que el Congreso pueda crear una ZEDE en una determinada área, las áreas de baja densidad poblacional quedan exentas del requisito según la misma reforma.¹⁰⁶ La Constitución define a las áreas de baja densidad poblacional como áreas en las cuales el número de residentes permanentes por kilómetro cuadrado es menos que el promedio para áreas rurales. Por esta definición, una minoría considerable de las áreas rurales en que viven los hondureños debe inevitablemente tener una densidad poblacional menos que el área rural promedio. Cualquier habitante de Honduras viviendo en una de tales áreas podría descubrir que el gobierno haya determinado sin votación popular que su comunidad se ubique dentro de los límites de una ZEDE, gobernada a perpetuidad por funcionarios no electos, y ya no sujeta a la gran mayoría del derecho hondureño. Esa imposición unilateral de un régimen antidemocrático sobre los hondureños rurales también es una violación de los derechos de auto-determinación y de participación democrática.

b. Derechos de Propiedad

Aunque ninguna ZEDE haya surgido todavía, la delegación de NLG está preocupada por el futuro impacto de esas zonas en los derechos de propiedad de los hondureños, asegurados por las obligaciones de Honduras en virtud de los tratados internacionales. El derecho a la propiedad privada está contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos:

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Reforma Constitucional, Art. 1 (reformas al Art. 329 de la Constitución).

¹⁰⁷ Convención Americana, Art. 21.

Aunque la Ley ZEDE estipula un mecanismo para indemnizar a los dueños de propiedades apropiadas por una ZEDE,¹⁰⁸ existe el claro peligro que muchas personas viviendo en Zacate Grande y otras áreas siendo consideradas para ZEDES no podrían aprovechar esos procedimientos. Los habitantes entrevistados por la delegación de NLG enfatizaron reiteradamente que aunque muchos de ellos habían vivido en sus tierras durante generaciones, no tienen un título legal, y que sus esfuerzos para obtener un título se quedaron en nada dado el sistema confuso, costoso y corrupto de titulación de tierra. Debido a la falta de un título, es bastante probable que muchas personas viviendo en áreas donde se podrían establecer ZEDES sean desalojadas de las tierras ocupadas por sus familias durante generaciones, sin la indemnización justa estipulada por la Convención Americana.

c. Derechos de los Pueblos Indígenas a la Consulta Previa y las Tierras Tradicionales

Ya que ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP, por sus siglas en inglés), Honduras está obligada a consultar con los pueblos indígenas cada vez que se consideren medidas legislativas o administrativas que los podrían afectar directamente.¹⁰⁹ Aunque la Ley ZEDE afectará directamente a los pueblos indígenas si se establecen ZEDES dentro de o adyacente a tierras que tradicionalmente han ocupado los pueblos indígenas, la delegación de NLG no está consciente de ningún esfuerzo del gobierno para iniciar consultas con pueblos afectados. Esto es preocupante ya que algunas áreas bajo consideración para ZEDES, sobretudo las que están ubicadas en la costa norte de Honduras, están en regiones pobladas en gran parte por pueblos indígenas.

Aunque la UNDRIP declara expresamente que los pueblos indígenas “tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido,”¹¹⁰ y tanto el Convenio 169 como la Convención Americana contienen estipulaciones similares,¹¹¹ hay casos documentados recientes de la falta del gobierno hondureño a tomar la acción necesaria para hacer cumplir este derecho.¹¹²

¹⁰⁸ Ley ZEDE, Arts. 25, 26, 28.

¹⁰⁹ UNDRIP Art. 19; Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, Organización Internacional del Trabajo, 27 de junio de 1989 (entró en vigencia el 5 de septiembre de 1991), Art. 6, Sección. 1(a) (Convenio 169); véase también Indigenous and Tribal Peoples: Honduras, OIT, disponible en <http://www.ilo.org/indigenous/Activitiesbyregion/LatinAmerica/Honduras/lang--en/index.htm> (consultado por última vez el 3 de agosto de 2014).

¹¹⁰ UNDRIP Art. 26.

¹¹¹ Convenio 169 Art. 14; Convención Americana Art. 21; Comunidad Garífuna “Triunfo de la Cruz” y sus miembros v. Honduras, Caso 12.548, CIDH, Informe No. 76/12 ¶ 193 (2012).

¹¹² El sitio web de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) es una buena fuente para información actual sobre las luchas territoriales del pueblo Garífuna en Honduras. Está disponible en: <http://www.ofraneh.org>.

Un ejemplo duro de la negativa del gobierno de cumplir con sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales con relación a los pueblos indígenas se encuentra en la presentación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del caso de una comunidad Garífuna de Honduras. La petición inicial de la comunidad Garífuna a la CIDH contra el gobierno incluye aseveraciones que: 1) funcionarios públicos habían vendido a terceros tierras tituladas de la comunidad, 2) el gobierno obvió otorgar a la comunidad un título cubriendo el alcance total de sus tierras, y 3) a miembros de la comunidad que intentaron resolver la situación se les habían amenazado y asesinado.¹¹³ La CIDH recomendó que el gobierno asegurara la titulación adecuada de las tierras de la comunidad, que estableciera procedimientos para salvaguardar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, y que investigara y prosiguiera a quienes amenazaron y perjudicaron a los miembros de la comunidad.¹¹⁴ Cuando el gobierno hondureño no tomó cartas en el asunto, la CIDH sometió el caso a la Corte Interamericana. La carta de presentación del caso por la CIDH expone sus hallazgos que “la ampliación del casco urbano por parte de autoridades estatales y la venta de tierras comunitarias han constituido una afectación del territorio ancestral,” de la comunidad Garífuna, que esta “situación supuso el desconocimiento de las obligaciones legales del Estado y, en particular, de las conocidas reivindicaciones territoriales de la Comunidad,” y que todo aquello “dio lugar a fuertes presiones, amenazas, e incluso el asesinato y detención de líderes, lideresas y autoridades comunitarias.”¹¹⁵

La inactividad de Honduras con respecto a las problemáticas subyacentes y las recomendaciones de la CIDH en el caso de la comunidad Garífuna es una fuerte señal de lo que vendrá durante la implementación de la Ley ZEDE. Un maremágnum de otros casos relacionados con problemáticas analógicas está ya en juego en Honduras, y parece lógico que con el traspaso forzoso de tierras relacionado con las ZEDEs, la situación irá de mal en peor. Dado el ambiente político y el actual estado de documentación de tierras Honduras, se sabe con certeza que tierras pertenecientes a los Garífuna y otros pueblos indígenas no se han titulado de forma correcta, y que incluso sus tierras tituladas están en peligro de perderse ante las ZEDEs u otros intereses de desarrollo sin la consulta previa o indemnización exigidas por la ley.

¹¹³ Comunidad Garífuna “Triunfo de la Cruz” y sus miembros v. Honduras, Caso 12.548, CIDH, Informe No. 76/12 ¶¶ 3, 22 (2012).

¹¹⁴ Comunidad Garífuna “Triunfo de la Cruz” y sus miembros v. Honduras, Caso 12.548, CIDH, Informe No. 76/12 ¶ 295 (2012).

¹¹⁵ Carta de Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta del CIDH a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario del CorteIDH sobre: Caso No. 12.548, Comunidad Garífuna “Triunfo de la Cruz” y sus miembros (21 de febrero de 2013), disponible en línea (consultado por última vez el 3 de agosto de 2014): <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12.548NdeResp.pdf>.

d. Obligaciones de Empresas y Derechos Humanos

La delegación de NLG está preocupada también que las empresas que participarían en las ZEDES se volverían cómplices en violaciones de derechos humanos cometidas por el estado hondureño, y que posiblemente cometerían o instigarían y asistirían violaciones de derechos humanos adicionales ellas mismas. En el 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU esclareció el rol de las empresas en el régimen internacional de derechos humanos al suscribir los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos (Principios Rectores). Los Principios Rectores afirman que “la responsabilidad de respetar los derechos humanos constituye una norma de conducta mundial aplicable a todas las empresas, dondequiera que operen.”¹¹⁶ Eso aplica a todos los “derechos humanos internacionalmente reconocidos,” los cuales los Principios Rectores definen “como mínimo” aquellos expresados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el PIDCR, el PIDESC, y la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.¹¹⁷ Además, los Principios Rectores prescriben que puede que las empresas necesiten considerar estándares adicionales, prestando especial atención a grupos o poblaciones con mayores riesgos de vulnerabilidad, incluyendo a los pueblos indígenas.¹¹⁸ Son deberes de las empresas tanto evitar “que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos,” y tratar de “prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos.”¹¹⁹

Dado que la estructura de las ZEDES acaba inevitablemente con la capacidad de los habitantes de las ZEDES de votar y participar en el gobierno a través de la democracia representativa, una empresa operando en una ZEDE estaría contribuyendo a la violación por el gobierno hondureño del PIDCR y el PIDESC, y estaría así violando los preceptos de los Principios Rectores. Es más, dadas las preocupaciones sobre el derecho a la propiedad y los derechos de los pueblos indígenas, es probable que una empresa operando en una ZEDE entre en violación de esos derechos o que contribuya a sus violaciones por el gobierno. Con base en las violaciones de derechos humanos actuales y potenciales involucradas, la delegación de NLG cree que corresponde animar a las empresas a no participar en las ZEDES, y oponerse a las que lo hagan.

¹¹⁶ Consejo de Derechos Humanos de la ONU, *Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos*, ¶ 11 Comentarios, U.N. Doc. A/HRC/17/31 (16 de junio de 2011).

¹¹⁷ Consejo de Derechos Humanos de la ONU, *Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos*, ¶ 12, U.N. Doc. A/HRC/17/31 (16 de junio de 2011).

¹¹⁸ Id.

¹¹⁹ Consejo de Derechos Humanos de la ONU, *Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos*, ¶ 13, U.N. Doc. A/HRC/17/31 (16 de junio de 2011).

IV. CONCLUSIÓN

Las condiciones para la gente común en Honduras han degenerado de forma precipitada desde el golpe de Estado en el 2009. El gobierno y las fuerzas de seguridad están plagados por corrupción, la pobreza es generalizada, y Honduras está en la cúspide de la tasa global de homicidios per cápita. La violencia relacionada con las drogas y maras, más la violencia doméstica, han cobrado miles de vidas. Al mismo tiempo, ha aumentado la represión estatal contra quienes se organicen en oposición a las políticas del gobierno que contribuyen al sufrimiento generalizado, generando un clima de temor e impunidad. Estas condiciones desgarradoras están entrelazadas. Hasta que los ciudadanos hondureños tengan acceso al empleo y un sustento seguro, se defenderán de un gobierno que no democratiza las oportunidades económicas y sociales. En respuesta, el gobierno hondureño empleará tácticas letales para hacer cumplir sus prioridades y reprimir la disidencia.

Honduras necesita urgentemente el desarrollo económico, pero las políticas de desarrollo no pueden reproducir décadas de iniciativas neoliberales que no han hecho nada para aliviar el sufrimiento de la mayoría de la población, y que sólo han servido para enriquecer a las élites económicas y políticas del país. Ante ese fondo, la perspectiva de las ZEDES despierta bastante alarma sobre el futuro de los cientos de miles de hondureños para quienes el gobierno ya no provee seguridad, estabilidad, y las necesidades humanas básicas. La descripción a grandes rasgos presentada en la misma Ley ZEDE quitará a los ciudadanos derechos garantizados en la ley hondureña e internacional, y la implementación de esas zonas amenaza con violar una amplia gama de derechos protegidos al nivel internacional. En vez de cumplir con sus obligaciones de velar por sus ciudadanos, Honduras está cediendo esas obligaciones a inversionistas internacionales que se centran en aumentar las ganancias y no proveer la seguridad económica y personal. La comunidad internacional debe mantenerse alerta por el posible desastre de derechos humanos que podría crearse cuando el gobierno hondureño privatice las funciones estatales que sirven como sus principios y deberes fundamentales de organización.

V. PARTICIPANTES EN LA DELEGACIÓN

Lauren Carasik es una Profesora Clínica de Derecho y la Directora de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho en la Universidad de Western New England.

Tyler Ingraham está en su segundo año de estudiar derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Western New England, y planea trabajar en solidaridad con poblaciones marginadas en cualquier forma que sea más eficaz una vez que se gradúe. Actualmente trabaja sobre cuestiones relativas a la vivienda en el occidente de Massachusetts, además de su trabajo de solidaridad internacional.

Christopher Martin es un abogado y vive en Jersey City, NJ. Trabaja sobre cuestiones del descubrimiento para varios bufetes de litigación en representación de demandantes. Mientras estudiaba derecho en Nueva York, fundó un capítulo de NLG y luego empezó a participar activamente en los comités ejecutivo y de defensa masiva del capítulo de la ciudad de Nueva York.

Steven M. Quesinberry es un abogado y vive en el estado de Washington. Graduó con honores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle, donde trabajó con beca de colaboración en el Centro sobre Empresas, Derecho y Sociedad, fue co-presidente del capítulo de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) de la facultad, y escribió reseñas de libros para el periódico universitario.

Mark Sullivan es un abogado ambiental y profesor adjunto de Santa Cruz, California trabajando en promover mayor conocimiento de los derechos humanos, la justicia ambiental y la política internacional en Centroamérica. Mark ha participado activamente en varias delegaciones recientes a Guatemala, Honduras y El Salvador.